

Félix Ovejero Lucas

LA INVENCIÓN DEL AGRAVIO

NACIONALISMO Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Alianza Editorial

Primera edición: enero de 2026

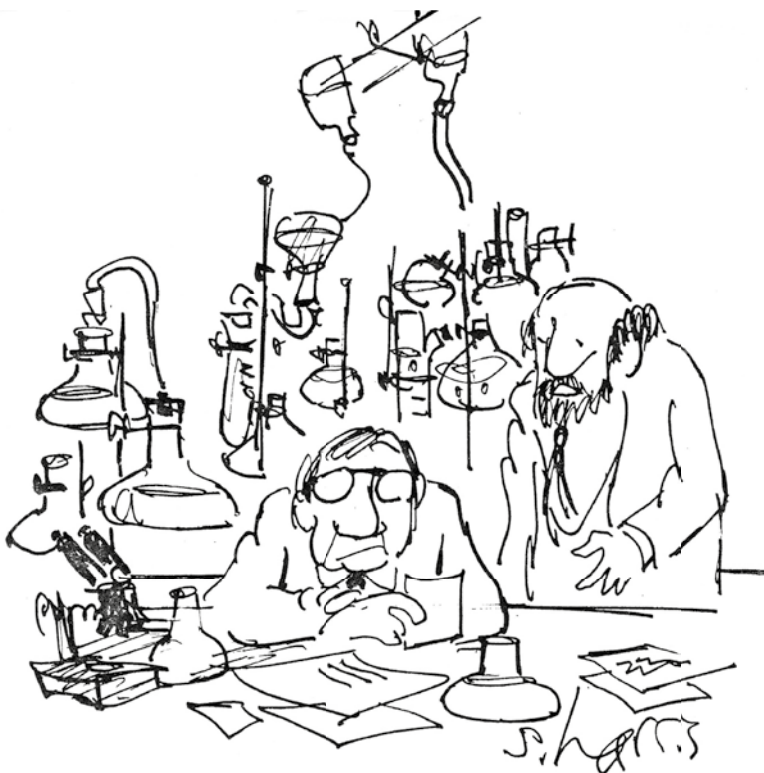
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.



© Félix Ovejero Lucas, 2026
© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2026
Calle Valentín Beato, 21; 28037 Madrid
www.alianzaeditorial.es
ISBN: 979-13-7009-131-6
Depósito Legal: M. 19.858-2025
Printed in Spain

ÍNDICE

Prólogo y agradecimientos	11
Introducción. La fábula del conflicto territorial	17
1. El nacionalismo al desnudo	33
2. La mentira fundante	49
3. Memoria y mentira	75
4. Lenguas y dictadores	93
5. El extravío de la izquierda	127
6. Nacionalismo y tradiciones ideológicas	153
7. Construcción y erosión del Estado	187
8. El error de la transición	205
Para terminar. Contra la conllevancia, la nación de ciudadanos	233
Apéndice. Sobre la historia y los métodos	249



"DON'T FEEL BAD ABOUT FALSIFYING
THE SOLUTION. I FALSIFIED THE PROBLEM."

«No te sientas mal por falsificar la solución. Yo falsifiqué el problema».

Copyright © 2025 by Sidney Harris.

Pero cuando quiso ocupar un sitio en el clan, se vio hostilizado por picos de bordes dentellados y cuellos de guardar distancias. Se le tuvo en la orilla de un potrero, alzándose una muralla de plumas blancas en torno a las hembras indiferentes. Entonces Ti Noel trató de ser discreto, de no imponer demasiado su presencia, de aprobar lo que los otros decían. Solo halló desprecio y encogerse de alas. De nada sirvió que revelara a las hembras el escondite de ciertos berros de muy tiernas raíces. Las colas grises se movían con disgusto, y los ojos amarillos miraban con una altanera desconfianza, que reiteraban los ojos que estaban del otro lado de la cabeza. El clan aparecía ahora como una comunidad aristocrática, absolutamente cerrada a todo individuo de otra casta. El Gran Ánsar de Sans-Souci no hubiera querido el menor trato con el Gran Ánsar del Dondón. De haberse encontrado frente a frente, hubiera estallado una guerra. Por ello Ti Noel comprendió pronto que, aunque insistiera durante años, jamás tendría el menor acceso a las funciones y ritos del clan. Se le había dado a entender claramente que no le bastaba ser ganso para creerse que todos los gansos fueran iguales. Ningún ganso conocido había cantado ni bailado el día de sus bodas. Nadie, de los vivos, lo había visto nacer. Se presentaba, sin el menor expediente de limpieza de sangre, ante cuatro generaciones en palmas. En suma, era un meteco.

Ti Noel comprendió obscuramente que aquel repudio de los gansos era un castigo a su cobardía. Mackandal se había disfrazado de animal, durante años, para servir a los hombres, no para desertar del terreno de los hombres.

Alejo Carpentier, *El reino de este mundo*

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Hace unos años, en el prefacio a *Secesionismo y democracia*, un libro de crítica al nacionalismo, escribí: «Me gustaría no tener razones para volver sobre esta cuestión, pero me temo que tampoco ahora se cumplirán mis deseos». Tengo (ay, tenía) entre manos dos libros, uno sobre la derecha reaccionaria y otro sobre el socialismo, el buen socialismo. Pero tendrán que esperar. Lo urgente, que esta vez también es lo importante, se impone a lo intelectualmente estimulante. Porque, ya ven, otra vez sobre lo mismo. Así están las cosas. Pareciera que tampoco esta vez mis deseos se cumplen. El nacionalismo sigue ahí. Según dicen, sobre todo quienes no viven en las comunidades históricas —que al parecer consideran que las demás, como esquejes recientes, carecen de historia—, se ha aliviado la crispación, el famoso *soufflé*. También lo afirman, entre quienes viven en las comunidades con pedigrí, aquellos que no hace tanto alentaban la violencia callejera, asaltaban aeropuertos y suspendieron la ley común, aquella que nos

garantiza la condición de ciudadanos libres e iguales. Les confieso que me inquieta la satisfacción que muestran con la situación actual. Sobre todo, porque no han renunciado a sus objetivos ni a los procedimientos, a incumplir leyes y sentencias.

Mi impresión es otra. La leerán detallada en las páginas que siguen. Pero, como le gusta decir a un buen amigo, les haré el cuento corto: en España hemos normalizado las patologías políticas. Estamos instalados en un delirante guion según el cual las leyes se redactan de acuerdo con los delincuentes y debemos aplaudir su ocasional cumplimiento. Algo muy serio: cuando hacer lo debido y obligado se entiende como un gesto de generosidad, estamos otorgando licencias para el delito. Solo se agradece lo que es potestativo.

Una impunidad perfectamente compatible con la tranquilidad callejera. No es algo nuevo: donde manda la mafia, reina la paz. Mejor no levantar la voz, no quejarse. Sobran los ejemplos. Hace unos meses, un profesor de Derecho que iba a impartir una conferencia recibió una amenaza. Cuando informó a su decano, sucedió lo habitual: se canceló el acto. No había que crispár. La paz. Estas cosas suceden en las universidades catalanas. Y si suceden cada vez menos es porque, cuando las amenazas funcionan, no son necesarias. De nuevo, poco a poco, otra vez en el oasis. En el cenagal. Y complacidos.

La libertad de expresión, el cumplimiento de la ley, los derechos de los estudiantes, otro día. Total, para hablar sobre Europa, que de eso iba la conferencia, en... *una facultad de derecho*. Sí, derecho, han leído bien. Pero ya se sabe, los académicos no somos héroes. A veces nos convertimos en cómplices: hay un corto camino psicológico que conduce por lo directo de la cobardía a la complicidad. De qué si no la proliferación de tantos «antifascistas»: mejor señalar, no sea que nos señalen.

Sencillamente, en Cataluña el incumplimiento de la ley apenas importa. Según el último informe de Impulso Ciudadano, el 80,5 % de los ayuntamientos catalanes no muestra la bandera constitucional. Muchos, gobernados por socialistas. Es decir, no se cumple ni la ley que simboliza el cumplimiento de la ley. Y tampoco escandaliza que doscientos sanitarios sean denunciados cada año por no atender en catalán. En cambio, se celebra que Salvador Illa haya flexibilizado el requisito de catalán para contratar médicos debido a la falta de personal sanitario. Entre conciudadanos. Una noticia que resulta inquietante. Si hay que explicarlo, tenemos un serio problema moral.

En fin, que toca volver sobre el fatigado asunto. Porque no creo que estemos mejor. No son pocos los que piensan lo contrario, que estamos mejor. No es ese mi parecer; más bien al contrario, pienso que estamos peor. Y es que la situación descrita si algo muestra es una suerte de resignada entrega a lo que bien podríamos calificar como desidia constitucional. Me dirán: pero total, ¿qué hay de nuevo? Lo nuevo es que ahora, cada vez que Illa cumple la ley, corremos a agradecersele. Lo nuevo somos nosotros y nuestras valoraciones positivas cuando se rebajan las exigencias injustas sobre unos conciudadanos solo porque resultan necesarios, porque no queda otro remedio. La justicia, solo si le conviene al poderoso. Exactamente, la negación de la mejor idea de libertad, la libertad republicana, la ley que nos obliga a todos.

En el fondo, nuestra dejación colectiva confirma la extensión al conjunto de España de una patología que, hasta ahora, parecía limitada a las comunidades históricas. Digo «parecía» porque, en rigor, lo que sucede en una parte de un país, sucede en todo el país. Desde cierta perspectiva la ley es un bien público, en tanto cumple los requisitos de no exclusividad y no rivalidad: nadie puede ser excluido de su «consu-

mo», puesto que todos los ciudadanos están sujetos a ella; y el disfrute de protección por parte de una persona no agota ni reduce la disponibilidad para los demás. Y, por lo mismo, si hay una injusticia —si no se cumple— en Barcelona o en Sevilla hay una injusticia —incumplimiento— en todas partes. La ley no se perimetra, no sea que, al final, acabemos por salvarnos todos porque la ley se cumple en la España vacía.

Sin tantas sutilezas: desde hace unos pocos años —no hará falta decir desde cuándo— ya todo da lo mismo y ahora en todas partes. Desde cierto punto de vista, esa circunstancia, poco discutible, debería proporcionarme cierta satisfacción intelectual, cínica si quieren, pues avala, siquiera indirectamente, las tesis centrales de este libro: el nacionalismo no tiene remedio, al menos, en nuestro marco institucional, ideado para resolverlo. En todo caso, el modesto consuelo que ello pueda suponer no compensa el desánimo político, porque no hay vida buena cuando la vida de todos anda emponzoñada con el veneno cainita del nacionalismo.

* * *

Las páginas que siguen incorporan algunos pasajes de artículos de prensa y, reescritos, de otros más largos aparecidos en *Letras Libres* y *Revista de Libros*. Algunos de aquellos textos se beneficiaron de los comentarios de Carme Castells, Jahel Queralt y Rocío de Frutos. Vaya aquí mi gratitud por eso y por otras cosas mucho más importantes, las más importantes. Una versión previa de este texto fue revisada por Isabel Calvo Verdejo, profesora de Lengua Castellana y Literatura en el IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra, «un pueblito extremeño», según su propia descripción cuando se puso en contacto conmigo en agosto de 2023 y que pude visitar en el invierno de 2024, a iniciativa suya, para impartir una charla

en su instituto. Lleva uno «echadas» muchas conferencias (como dice mi buen amigo Andrés Trapiello), pero les aseguro que de aquella volví conmovido. Por dos razones. La primera, por el buen trabajo de aquel grupo de profesores. La segunda, porque, en un país donde las instituciones se descomponen día a día —con la indiferencia, cuando no la complicidad, de muchos ciudadanos—, pude comprobar que hay docentes que se toman en serio su enorme responsabilidad de formar ciudadanos; que, en las condiciones más precarias, se esfuerzan por mejorar sus conocimientos y ponerlos al servicio de sus alumnos y asumen su compromiso con el futuro de una España de ciudadanos libres e iguales. Se ajustan, como pocos, a aquellos de quienes habla Borges en el verso final de *Los justos*: «Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo». Sí, suena solemne, pero no sé decirlo de otro modo. Porque no hay otro modo de decirlo. Porque es verdad. Y lo que vale para Isabel vale para otro amigo, aún en condiciones más precarias, con el mismo «buen dispuesto entendimiento», que diría Cernuda: Juan Vázquez Navarro. De ahí la dedicatoria de este libro: mi modesto homenaje. Apenas relevante, no lo ignoro, pero es lo único que uno puede hacer.

INTRODUCCIÓN

La fábula del conflicto territorial

España es una anomalía antidemocrática. Sobre ese supuesto, fundamental para el nacionalismo, se ha edificado nuestra historia política reciente. También la transición y la Constitución del 78. Ajustemos un poco más el foco, aunque duela la imagen: ese supuesto explica nuestro sistema autonómico, presentado como una forma de solucionar el llamado «problema territorial», de reparar una injusticia de origen que, en lo esencial, consistiría en el aplastamiento español de unas genuinas naciones democráticas cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Ese aplastamiento se habría traducido en políticas de agresión, centralizadoras en la gestión, uniformadoras en cultura y expoliadoras en economía. Un proceso de varios siglos cuya expresión moderna se consuma en un proyecto nacionalista español represor que, en el caso catalán, adquiere especial virulencia a partir de 1714, con la guerra de Sucesión, cuando Felipe V promulga los Decretos de Nueva Planta, que sellarían «el fin de las libertades catalanas».

Desde entonces para acá, sin tregua, una imposición tras otra, hasta la última, con la sistemática persecución de la identidad catalana durante la dictadura que sigue a la victoria de Franco en la guerra civil, un conflicto entre la España constitutivamente reaccionaria y los nacionalismos no menos esencialmente democráticos. He dicho la última, pero, no, en rigor, la penúltima. Y es que, según este relato, el llamado «régimen del 78», cristalizado en la actual Constitución, tutelada en su gestación por fuerzas franquistas, nacida sin ruptura con el régimen anterior, no sería más que la prolongación suavizada de la dictadura. La consagración de la monarquía borbónica, reinstaurada por decisión de Franco, sería la mejor prueba.

Esa es la fabulación, gestada por los nacionalistas, aceptada y difundida por la izquierda, y que ha acabado por inocularse a nuestro entero ecosistema político. A partir de ahí, todo lo demás. Y es que, una vez se asume que España se construye contra las genuinas naciones, encarnación de los valores democráticos y quintaesencia del progreso, resultan casi obligadas unas cuantas tesis que han oficiado con pautas reguladoras de nuestros debates públicos especialmente durante los últimos cuarenta años: atender a las exigencias de los nacionalistas supone ahondar la democracia; desmontar la nación común y su expresión institucional, el Estado, se entiende como una política de izquierdas; la «moderación política» se calibra según el grado de acuerdo con los nacionalistas; cualquier centralización es regresiva o, lo que viene a ser lo mismo, «España», «centralización» y «franquismo» resultan términos intercambiables; los nacionalistas establecen los parámetros de la tolerancia de nuestros políticos y deciden el campo de juego de nuestras convenciones, los premios y las penas. Un conjunto de tesis que se traducen en una prescripción: para resolver el problema de la democracia debemos resolver el llamado «problema territorial». Con un corolario: para enterrar definitiva-

mente al franquismo deberíamos acabar con España como nación política común.

Frente a la fábula anterior aquí se sostendrá que el «conflicto territorial» es un pseudoproblema y, por esa misma naturaleza, falsa, los intentos —infructuosos por definición— de resolverlo están en el origen de nuestros problemas de calidad democrática. Problemas, estos sí, muy reales y de creciente magnitud. Como resultado del falso diagnóstico, el propio tratamiento ha alimentado la enfermedad. Entre esos tratamientos se incluye el propio sistema autonómico, su perverso sistema de incentivos, responsable en buena medida del agravamiento de las patologías. Andando el tiempo, el falso conflicto, nunca diagnosticado, ha derivado en un conflicto bien cierto que en nada se parece al comúnmente descrito. Y, enfilada la senda, pues a peor, sin alternativas. Mientras aceptemos el falso guion, no quedará otra cosa que la conllevancia: la única política posible es el parcheo, el ir tirando al precio que sea. Eso sí, a un precio cada vez mayor: el deterioro irreparable de nuestra convivencia, de la igualdad de los españoles, de la democracia. Con un resultado final previsible: el Estado, la única herramienta conocida para encarar los problemas colectivos, descoyuntado, impotente ante los retos genuinamente políticos.

No cabe engañarse: buena parte del problema de nuestra democracia radica en los recreadores del pseudoproblema territorial, muchos de los cuales carecen de acicates para resolverlo. Se nutren del conflicto que crean y lo mantendrán mientras les convenga. No es raro. Sucede con muchos oficios, especialmente en los casos de mercados de información asimétrica. Mi ejemplo favorito —y cruz— son los informáticos de la Universidad que, año tras año, cuando ya sabíamos cómo orientarnos en la página web, nos cambian las reglas de juego. En lo que nos ocupa, incluso los no nacionalistas, en

su miopía, han contribuido a agravar los problemas con sus falsas soluciones. Como si estuviéramos ante una de esas composiciones imposibles de Escher, vamos de arriba abajo sin encontrar la (inexistente) salida. Con otra comparación más ajustada: estamos como ante esas (pseudo)enfermedades psicológicas cuyo tratamiento (terapias de conversión sexual, recuperación de experiencias pasadas) acaba en otros achaques bien reales (depresión, falsos recuerdos), que no tardan en convocar a una legión de terapeutas que, enredados en los fraudulentos males, comienzan a formar parte del problema. Como los curanderos cuando convierten sus supercherías en disciplinas universitarias.

Reajustada la perspectiva se impone otro guion. La única solución al «problema» consiste en discutir al nacionalismo y su tramposo relato. Debemos dejar de asumir el relato del conflicto (irreal) y pretender resolverlo atendiendo a las exigencias de quienes se lo han inventado y viven de cebarlo. Se ha repetido mil veces: no se puede contentar a quien no quiere ser contentado. Solo si no nos encelamos en la patraña la solucionaremos, por disolución. Hay ejemplos. Cuando la recreación radiofónica de Orson Welles de *La guerra de los mundos*, el relato de H. G. Wells, puso a miles de norteamericanos en las calles, convencidos de la llegada de los extraterrestres, las autoridades no movilizaron a las fuerzas aéreas para hacer frente a los marcianos. No sacaron el ejército a la calle para luchar contra los molinos. También entonces una ficción estaba en el origen de un problema real, las gentes en las calles. Ese era el problema, no los marcianos: una emoción, el miedo sostenido en una falsedad. Y se hizo lo debido, combatir la patraña, no preparar las armas antiaéreas. Bueno, en realidad, no es seguro que las cosas fuesen así. Pero ya me entienden.

¡Ah! Y da lo mismo si el cuento se lo han creído muchos o pocos, que no por ello dejará de ser un cuento. La calidad

moral o empírica de una creencia no depende del número de sus defensores. Es más, si aceptamos el número como argumento reforzaremos el trastorno y favoreceremos su extensión. Tenemos experiencias políticas elocuentes de cómo abordar locuras respaldadas por muchos trastornados. Como se hizo en 1962, cuando George Wallace se presentó a las elecciones para gobernador de Alabama, comprometiéndose a no cumplir la sentencia de la Corte Suprema de 1956 que garantizaba a los estudiantes negros el derecho a cursar estudios universitarios. Obtuvo el 96 % de los votos. Atendiendo a ese mandato democrático, el 11 de junio de 1963 se plantó en la puerta de la Universidad para impedir la entrada de Vivian Malone y James Hood. Nicholas Katzenbach, fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que acompañaba a los estudiantes negros, solicitó la ayuda del presidente. Ese mismo día John F. Kennedy emitió la orden ejecutiva 11111, que ponía bajo su mando a la Guardia Nacional de Alabama, hasta ese momento a las órdenes de Wallace. El general al mando, Henry Graham, se dirigió al gobernador con las palabras debidas: «Señor, es mi triste deber pedirle que se retire a un lado bajo la autoridad del presidente de los Estados Unidos». El incidente quedó zanjado. Hoy en Alabama los negros pueden entrar en la universidad y nadie se presenta a las elecciones para defender las ideas de Wallace.

Así estaban las cosas y así se abordaron. Y así se acabó con el problema. Aunque las cosas podían haber sido de otro modo. Permítanme un pequeño experimento mental sin mucha especulación, con materiales que nos resultan familiares. Para no ofender los sentimientos racistas, ampliamente compartidos por la población, y con amplio respaldo democrático, Kennedy podría haber optado por crear universidades especiales para negros o impedirles el acceso a los barrios acomodados de los blancos. Es de suponer, visto lo que hoy ve-

mos, que no tardaría en acudir, con la vocación servil bien conocida, una engrasada nómina de opinadores a favor del viento con una retórica perfectamente imaginable que seguro les sonará: se atienden las demandas de una mayoría y se evitan provocaciones. Hasta se podría decir que «desaparece el conflicto racial». Les suena, ¿verdad?; con esos mimbres se ha urdido la trama de nuestra historia reciente. En la que andamos. Conllevando.

Nuestros políticos nunca se han comportado como Kennedy aquel día. No han combatido las ficciones ni los trastornos nacionalistas, también racistas en sus detalles, que sobre eso hay solventes pruebas empíricas y filológicas, como se verá. Por el contrario, nuestro entero espectro político lleva años haciendo concesiones a los nacionalistas y, con ello, dándoles argumentos. También lo habrán escuchado: si les damos lo que piden, se quedarán sin razones para quejarse. Con más exactitud: para no darles excusas o motivos, les damos la razón. Claro que darles la razón, esa singular manera de «dejarlos sin argumentos», no es lo mismo que desmontar estos. Con nuestras cesiones se llevan nuestro beneplácito y reforzamos sus convicciones: a sus ojos, nuestras tibias reparaciones muestran la enorme magnitud de nuestra maldad. Si hasta nosotros lo aceptamos, imaginen lo enorme que es el daño infligido. Eso es exactamente lo que aceptamos: nuestra culpa. La ley de amnistía es el ejemplo más consumado. Les hemos pedido perdón por obligarlos a saltarse la ley. Ya pueden adivinar las consecuencias: hay que reparar, una vez más, el mal causado. Una tarea imposible, porque el mal está en nosotros, nos posee. Somos españoles. La marca de Caín.

Con materiales como los descritos hemos levantado un viciado paisaje público peleando con trampantojos. En una singular división del trabajo, todos los protagonistas políticos

—o al menos todos los que importaban— han contribuido, cada uno en su labor, a difundir el falso diagnóstico y, por lo mismo, a agrandar el problema: fabricado el relato por los nacionalistas, la izquierda se ha encargado de otorgarle sello de calidad progresista y, finalmente, sin la menor objeción, la derecha con responsabilidades políticas lo ha adquirido y distribuido. Lo primero es natural y hasta necesario, pues no hay nacionalismo sin mitología original: una comunidad ancestral dotada de una genuina identidad colectiva sostén de su cohesión social y cuya preservación justificaría la necesidad de estructuras políticas. El lema «una nación, un Estado» condensa eficazmente el programa nacionalista. Lo tercero, la asunción por parte de nuestra derecha de la fabulación nacionalista, presenta perspectivas en diferentes direcciones, según el tipo de derecha. No es lo mismo la conservadora-reaccionaria, comunitarista, acostumbrada a invocar las tradiciones y los ritos compartidos, que la moderna-liberal, defensora del mercado, la eficiencia, crítica de las intervenciones públicas y, cuando es consistente (esto es, casi nunca), hasta partidaria de acabar con las fronteras. Como se verá en su momento, cada una de esas variantes presenta vectores que tironean en direcciones opuestas con una resultante final impredecible. En todo caso, la expresión última ha consistido en una disposición complaciente, cuando no servil, con el nacionalismo.

La mayor sorpresa se encuentra en el segundo eslabón de la cadena, en la izquierda y su incomprensible protagonismo en la imposición del relato nacionalista. Sin su colaboración este no se habría consolidado hasta convertirse en una parte indiscutida de nuestro paisaje político. Tan indiscutida que pasa desapercibida, como el agua para los peces. La izquierda ha resultado decisiva en la legitimación política y moral del nacionalismo al otorgarle el *nihil obstat* de las buenas causas que en España administra casi en exclusiva. Porque, más allá

de circunstanciales vaivenes políticos, en nuestro entorno inmediato y especialmente en España la izquierda es quien traza los perímetros de los debates político-morales, sus asuntos y sus respuestas aceptables. Un privilegio resultado de diversas circunstancias, algunas indiscutibles, justificadas, como su histórica lucha por la democracia y la igualdad y, en nuestro caso, su protagonismo —con enormes costes personales— en la oposición a la dictadura de Franco; y otras no tanto, como esa suerte de «somos estupendos» que se ha dado en llamar «superioridad moral».

Si el análisis anterior es acertado, si no hay un problema territorial, sino un problema nacionalista, el tratamiento debería ser otro: hay que desactivar la patología. Hay que combatir al nacionalismo sin tomar sus proclamas como la descripción del problema. Tenemos experiencias. No dimos por buena la descripción del mundo de los racistas ni tampoco la de los machistas. No nos creímos que los negros estaban negados para la vida social, que no se podía convivir con ellos, ni que las mujeres eran seres inferiores necesitados de protección e incapaces de decidir acerca de cómo llevar sus vidas. No nos tomamos como buenas las soluciones reaccionarias al «problema racial», al «problema judío» o al «problema femenino», sino que recordamos que no había problemas con los negros o las mujeres, que quienes nos hablaban de estos problemas eran el verdadero problema. Y combatimos sus tesis y sus políticas. No dimos «salida» a sus inquietudes, como no se las dimos a los homófobos que se sentían ofendidos porque dos hombres se amaran. El resultado está a la vista: tales ideas hoy encuentran pocos defensores en nuestra sociedad. Lo que les contaba de Kennedy.

Algo parecido habría que hacer con las ideas nacionalistas. Desalentarlas. Sobre cómo hacerlo algo habrá que decir. No mucho, que este no es un ensayo programático, pero sí

algo, aunque solo sea aquello que se sigue inevitablemente del cambio de perspectiva. En todo caso, vaya por delante, para acabar esta introducción, un anticipo de por dónde no cabe buscar las responsabilidades o las soluciones, en ciertos sospechosos habituales invocados cuando se quiere excusar la obligación de pensar en serio: en «los políticos», que no gestionan debidamente, o en los ciudadanos, que no votan bien. Ni tampoco en ambos, como sucede cuando se recurre a la fácil excusa de «tenemos los políticos que nos merecemos». Y no porque no sea verdad que en la clase política abundan los casos de ignorancia, olvido del (recreado) espíritu de la transición, mezquindad o desvergüenza; la ambición personal o falta de patriotismo; ni tampoco porque los ciudadanos sean santos y sabios, se informen y anden sobrados de virtudes públicas. Por supuesto, aún menos ayuda entregarse a la candorosa tesis de «la falta de lealtad de los nacionalistas», la tesis más estúpida de cuantas tiene uno leídas —y son muchas— entre los comentaristas.

Por ahí no hay nada que rascar. Ni los políticos ni los ciudadanos son aplicados discípulos de la Academia de Platón, y reclamar lealtad a los nacionalistas es como pedir cotufas en el golfo: un imposible metafísico. Sencillamente, la incompetencia y la mezquindad son los materiales con los que está amasado el barro con el que están forjados los protagonistas de nuestra obra colectiva. El propio sistema democrático propicia la selección de los peores. En algún otro libro he desarrollado el argumento. La competencia política no es un mercado eficiente. Por varias razones. La primera: los políticos, en su relación con los ciudadanos, vienen a ser como los mecánicos o los informáticos en sus tratos con los consumidores: al final, funciona, pero no sabemos —ni podemos saber— si han hecho el trabajo que nos cuentan. En esos casos, no es que no asomen los buenos, es que se los castiga. La